

La violencia en los colegios de Bogotá

Por: Julián De Zubiría Samper

Recientemente han sido divulgados los resultados de un completo estudio sobre la violencia en los colegios de Bogotá. La investigación cubrió cerca de mil centros de educación y en ella fueron entrevistados más de 82.000 estudiantes. El estudio, contratado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y realizado en conjunto entre la Universidad de los Andes y el DANE entre marzo y abril de 2006, es el más completo que sobre el tema de la violencia escolar se haya realizado en el país, y los resultados son, en extremo preocupantes. Uno de cada dos de los estudiantes ha sido robado en su colegio (56%) y uno de cada tres ha sido objeto de golpes y maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio (32%). De estos últimos, 4.330 dijeron haber requerido atención médica después de la agresión, y 2.580 aseguraron que quien los amenazó, portaba un arma.

Respecto a las víctimas, uno de cada dos aceptó haber insultado a un compañero en el año anterior (46%), y uno de cada tres aceptó haber ofendido y golpeado a otro compañero (32%) (El Tiempo, 27 de marzo del 2008 y El Espectador, 29 de marzo del 2008).

Los resultados son bastante más preocupantes que los revelados en diversos estudios internacionales, pero corresponden a un tema de creciente preocupación en el mundo escolar, conocido como "Bulling" o matoneo escolar. Este fenómeno viene en aumento en el mundo y se asocia a diversos factores culturales y familiares de las últimas décadas; factores que han sido agravados en el contexto de una sociedad que ha convivido con diversas formas de violencia desde décadas atrás, como es el caso de la sociedad colombiana.

Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), realizado en diversos países de América Latina (Argentina, México, Brasil, Chile, Puerto Rico y Colombia) había encontrado que uno de cada cuatro de los estudiantes latinoamericanos había sido agredido verbalmente por sus compañeros, el 16% había sido objeto de robos o daños en sus pertenencias, un 10% había recibido golpes y un 8% informó que había sido amenazado por sus compañeros (Portal del MEN, 26 octubre de 2007). Aun así, estas cifras podrían estar subregistradas, y por informaciones periodísticas sería previsible encontrar niveles un poco más cercanos a los ubicados en el reciente estudio colombiano. Es así como según el Ministerio de Educación de Chile, los niveles de agresión de compañeros en Chile se presentan en cerca del 38% de los estudiantes (Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación de Chile). Niveles más bajos han sido encontrados en estudios adelantados en España (18% para 1997, Ortega, 2000) y relativamente

cercanos han sido estimados en investigaciones similares para Inglaterra (26% en adolescentes, Ortega, 2000).

No resulta casual que Chile y España sean dos de los países en mayor medida hayan manifestado alta preocupación por los altos niveles de agresión o maltrato entre estudiantes. Tanto en Chile como en España, durante y después de las dictaduras de Franco y Pinochet, existieron diversas formas de violencia entre estudiantes, permitidas y avaladas culturalmente en el contexto de dos dictaduras. Una de las más comunes de ellas permanece hasta nuestros días y se relaciona con el ingreso de los estudiantes a las universidades. Estas prácticas han adquirido características dramáticas y una de ellas está ampliamente incorporada en la cultura, en especial de las universidades privadas y es denominada la práctica del “mechoneo”. El recibimiento del “primiparo” se realiza mediante un bautizo en el cual se le corta el cabello, se le pinta y corta la ropa y se le envía a pedir limosna a la calle durante su primera semana en la universidad. En el 2006, en Santiago de Chile, dos estudiantes terminaron siendo quemados por ácido en estas prácticas de bautizo y en el 2007, allí mismo, dos jóvenes terminaron en clínicas después de ingerir diversas mezclas étlicas por imposición de sus compañeros mayores, al tiempo que son frecuentes abusos y manoseos de mujeres menores. Dichas prácticas evidentemente violan los mínimos derechos humanos, pero son bastante toleradas por la sociedad hasta el día de hoy. En ambos países estas prácticas se consolidaron en el periodo de las dictaduras, y se han mantenido después del retorno a la democracia, evidenciando una vez más que los procesos sociales y culturales tardan mucho más tiempo del previsto inicialmente en consolidarse y que una época perdura más tiempo de la que en realidad es vigente, ya que prácticas, derechos y actividades sobreviven durante algún tiempo después. Y resulta relativamente claro de entender que en el contexto de países en los que se violaban sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado, se generalizaran estas prácticas humillantes para recibir a estudiantes, en general menores de edad.

Los resultados del estudio de la Universidad de los Andes y el DANE evidencian unos preocupantes niveles de violencia y agresión en las escuelas bogotanas, los cuales hay que interpretar a la luz de las condiciones históricas y políticas en las que han vivido dichos jóvenes, y teniendo en cuenta los crecientes cambios en las condiciones de vida familiar y cultural. Para empezar, resaltemos algunos aspectos del contexto sociocultural colombiano del último periodo.

Hemos vivido durante décadas en el contexto de una sociedad profundamente violenta. Las décadas del cuarenta y el cincuenta fueron testigo de un enfrentamiento armado entre los partidos liberal y conservador que dejó un número estimado de 300.000 muertos, en una sociedad que a la postre apenas contaba con una población levemente superior a la que Bogotá posee en la

actualidad. Convivimos desde los años sesenta con el secuestro, la guerra, el narcotráfico, la corrupción, la ilegalidad y la violación a los derechos humanos. Ocupamos uno de los primeros lugares de secuestrados en el mundo y uno solo de los grupos armados colombianos – las FARC – son el grupo que más personas ha secuestrado en el mundo. Somos paralela y tristemente el séptimo lugar en el mundo en corrupción según Transparencia Internacional, el sexto en violación a los derechos humanos según Amnistía Internacional, el segundo en el número de homicidios en América (Garay, 2004), el primero en asesinato de líderes sindicales según la OIT y el segundo en desplazamientos en el mundo (Amnistía, 2006). Con tristeza hay que decir que la convivencia con la guerra nos ha “endurecido afectivamente”, y por ello, estas parecen simplemente unas estadísticas más.

Cuando se les indagó a los ciudadanos de diversos países del mundo sobre su ciudad, unos años atrás, Bogotá fue imaginada como una ciudad violenta y gris (Silva, 2003). Convivimos con la producción y el transporte de droga durante décadas, y esta actividad fue permitida y avalada por el Estado y la sociedad. Es así como, ante el conocimiento abierto de la sociedad y en particular del mismo gobierno, las mafias de narcotraficantes se adueñaron de los equipos de fútbol, de empresas servicios, de barrios enteros, y de un estimado de seis millones de hectáreas, para lo cual contaron con el completo apoyo de los grupos paramilitares, y con su presión obtuvieron los seis millones de hectáreas que dejaron los más de tres millones de campesinos que fueron expulsados del campo por el conflicto armado de mayor duración en el mundo entero.

Una sociedad que de tiempo atrás ha sido excesivamente permisiva ante las múltiples formas adoptadas por la ilegalidad, ha terminado por erosionar, como afirma Garay, el tejido social. Es así como el 80% de los colombianos desconfía de los otros y el 70% cree que los colombianos nos aprovecharíamos de los otros si pudiéramos (Centro de Estudios Sociales, 2006).

Este es el contexto en el que se crían los estudiantes bogotanos. Y ese es la realidad que llega a los niños y jóvenes casi sin ninguna mediación de las familias y las escuelas, a través de los medios masivos de comunicación. Sin filtro, sin explicación, sin mediación, sin reflexión y sin argumentación, los medios masivos de comunicación acaparan el espacio que en los noticieros les dejan las noticias deportivas y de farándula; y que en su conjunto, dejan los realitys y las telenovelas.

Vivimos en una sociedad que fue profundamente tolerante con las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la guerrilla y el narcotráfico desde los años sesenta; y que en su última década ha sido crecientemente tolerante y permisiva con la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares. Según prensa, uno de cada dos colombianos considera a los paramilitares como un “mal menor”, y por ello suponen que su violencia, sus crímenes, sus motosierras y sus desapariciones se “justifican”. Según las declaraciones de uno de sus líderes más importantes del paramilitarismo (Salvatore Mancuso), uno de cada tres congresistas estaba vinculado a su

movimiento unos pocos años atrás; y parecen ser ciertos sus cálculos, ya que hasta el momento se han iniciado investigaciones contra 76 de ellos y 23 ya han sido condenados, cuando todavía no se han cubierto ni la mitad de los departamentos involucrados en el conflicto. Y la sociedad observa pasiva y complaciente esta violencia, argumentando que sigue siendo un “mal menor”.

Esta es la realidad en la que han vivido niños y jóvenes de las escuelas bogotanas, y por ello, aunque dramático, es entendible que uno de cada tres jóvenes informe que ha sido agredido por sus compañeros.

Unos años atrás, Corzo y Mockus (2004) habían encontrado que uno de cada tres jóvenes bogotanos consideraban que podían hacer lo que quisieran si ello los beneficiaba, incluyendo pasar por encima del otro. Y cuando este estudio se aplicó en Casanare, encontraron que la anomia se presentaba en uno de cada dos jóvenes de quince años que estaban estudiando en el grado noveno. La principal razón que argumentaban en su defensa, es que eso era lo que veían en el país.

Solo en los últimos días el país ha presenciado casos tan dramáticos y tristes como las escenas de un grupo de secuestrados que no levantan la mirada para observar la cámara, y que se pudren psicológica y físicamente en la selva, mientras sus secuestradores los utilizan como único botín de guerra. Así mismo, los niños han visto el pago de la más grande recompensa pagada por el Estado (cinco mil millones de pesos), a un guerrillero que se presentó con la mano de su comandante después de que lo había asesinado. Un Estado pagando a un asesino, y ni la Iglesia, ni los medios de comunicación, ni las escuelas abrieron el debate que una decisión ética de esta naturaleza ameritaba.

Los delitos de lesa humanidad son delitos cometidos contra la humanidad, y por ello ningún ser humano puede ser indiferente a ellos. Un crimen – como afirma Gómez Buendía – nunca puede justificar otro crimen, porque entonces nunca sería un crimen. No hay asesinatos “buenos” y “malos”. No hay desapariciones o secuestros que se justifiquen y otros que no, porque la vida es sagrada. Y si bien hay que usar la fuerza para repeler las acciones violentas, su uso tiene unos límites, unas condiciones morales, legales y éticas que no pueden ser sobrepasadas, porque entonces quien defiende la democracia, termina también cometiendo delitos contra la vida humana y contra la humanidad.

En este contexto generador de violencia, a la familia le cabe la enorme responsabilidad de haber disminuido los tiempos de comunicación y de elevar considerablemente los niveles de permisividad en el manejo de la autoridad en el hogar. Los estimativos nacionales establecen que el tiempo de comunicación entre un padre y su hijo adolescente son en promedio 5 minutos diarios (treinta y nueve segundos se ha encontrados en sociedades como EEUU). Siguen siendo muy poco confiables las estadísticas sobre separaciones familiares, pero los estimativos señalan que en uno de cada tres hogares no convive uno de los dos miembros. Y ante estas condiciones de debilitamiento de la estructura familiar, con tendencia a la disminución en el número de hermanos, a la reducción del rol

formativo de la familia extensa, con mayor vinculación al trabajo por parte de las madres, con creciente disminución de apoyo y de comunicación por parte de los progenitores, éstos han optado culturalmente por disminuir el seguimiento y acompañamiento a sus hijos y por dejarlos actuar en un contexto agreste y complejo, de una manera en extremo permisiva y condescendiente. Hijos solos, criados en mayor medida por Internet y los medios masivos de comunicación, que por sus propios padres. Ello, que no es para nada benéfico para la formación y la estabilidad socioafectiva de los hijos, les permite a los progenitores disminuir en parte la culpabilidad que les genera el relativo abandono al que les conduce una estructura familiar crecientemente debilitada y una sociedad que les ocupa laboralmente, aun en sus tiempos aparentemente "libres". ¿Qué pasará dentro de unos pocos años, cuando los hijos sean frutos de matrimonios entre hijos únicos que no interactúan con sus abuelos y que carecen totalmente de vecinos, tíos y primos?

A la escuela también le cabe su cuota de responsabilidad para explicar una creciente violencia presentada al interior de sus instalaciones, porque ha sido incapaz de mediar en torno a las violencias que subsisten en el país y porque no ha intervenido suficientemente cuando aparecen formas de matoneo o agresión entre sus miembros. Es así como en un estudio adelantado en Sevilla, España, los agresores señalaron que al 17% de los compañeros les parecía normal la agresión y que el 54% afirmaba que nadie la decía absolutamente nada cuando realizaban sus actos de agresión (Ortega, 1999) En nuestro país el sistema educativo ha dejado a los medios de comunicación la información y la socialización sobre los tipos y las características de la violencia en el país. No ha sido capaz de involucrar la realidad violenta, para discutir sobre ella, sobre sus orígenes e impactos en la vida, sobre su naturaleza y diversidad, sobre sus desarrollos y sus soluciones.

La escuela tiene que mediar, para que la violencia no llegue al niño de manera directa, sin filtro, sin reflexión y sin argumento, tal como se la presentan en los medios de comunicación; como un objeto, como una mercancía utilizada para elevar la audiencia. La escuela tiene que incorporar la temática de los múltiples conflictos que subsisten en la sociedad colombiana. Tiene que matizar y complejizar las interpretaciones tan maniqueas y elementales que a diario se observan en la vida cotidiana y en los medios masivos de comunicación. Es un deber ético y una obligación moral de nuestro tiempo. En mayor medida, si tenemos en cuenta que su responsabilidad es esencialmente con la formación y el desarrollo, y en mucho menor medida con el aprendizaje y la información. Y en mayor medida en una sociedad en la que los argumentos han venido siendo sustituidos por la injuria y la calumnia, y en la que la complejidad de una realidad social pretende ser acallada mediante la descalificación y la difamación. Vivimos días de enormes niveles de intolerancia, polarización y furia. Y eso, que no es para nada sano para la democracia, tampoco lo será para la formación de espíritus de los niños y jóvenes. Al fin y al cabo, ellos son en mayor medida fruto del trabajo que como sociedad, como familia y como escuela deseamos y nos esforcemos para que lo sean.

En consecuencia, los datos sobre la violencia en la escuela bogotana, deben servir para que social y familiarmente reflexionemos, ¿hasta qué punto dicha violencia se origina en nosotros mismos como adultos mediadores de su formación?

En este panorama, relativamente desolador, brillan por su papel esencial en el desarrollo de una mayor conciencia, sensibilidad y responsabilidad social de la formación de la juventud colombiana, las dos marchas masivas celebradas recientemente. En la primera, una sociedad masivamente se expresó contra las FARC y contra los delitos de lesa humanidad por ella cometida. En la segunda marcha, amplios sectores de la sociedad se expresaron contra todas las formas de violencia, pero en especial contra la violencia ejercida y organizada por los paramilitares, y la cual ha contado con el aval o el apoyo de algunos miembros del Estado. Son dos marchas que evidencian que pese a la violencia vivida en el país y al endurecimiento del corazón que ello ha generado. Los delitos de lesa humanidad obligan a todo ser humano a pronunciarse para que nunca se vuelvan a repetir. En este panorama de intolerancia y furia, son marchas que invitan a la esperanza. Y eso, en la educación, nunca puede perderse, porque solo pueden ser docentes aquellos que creen que las condiciones por negativas que sean, son posibles de modificar.

Referencias

El Tiempo (27 de marzo del 2008). Violencia en los colegios. Editorial.

El Espectador, 29 de marzo del 2008. Frente a la violencia escolar. Editorial.

Ministerio de Educación Nacional. Colombia. (26 de Octubre de 2007) Preocupa la violencia en los colegios Portal Internet.

www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-137064.html

Oficina de atención ciudadana del Ministerio de Educación de Chile
<http://www.600blog.cl/resguardo-de-derechos/maltrato-entre-estudiantes/>.

Ortega, Rosario. Educar la convivencia para prevenir la violencia.

